
Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras

KRISTINA PIRKER

Investigadora de Fundar - Centro de Análisis e Investigación y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

OMAR NÚÑEZ

Profesor e investigador de la UACM y del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

Resumen

Los autores hacen un balance del gobierno fracasado de José Manuel Zelaya Rosales, en Honduras, para lo cual analizan su estrategia y la correlación de fuerzas que hubo interactuado para terminar en el golpe de Estado de junio de 2009. Asimismo, plantean que hay esbozos de un impulso social democratizador que apunta a combatir la corrupción institucional, la inequidad social y la violencia cotidiana mediante la participación de una ciudadanía incipiente.

Abstract

The writers take stock of José Manuel Zelaya Rosales' failed administration in Honduras by assessing his strategy and the interaction of forces that ended in a coup d'état in June 2009. In addition, they note the presence of a nascent democratic and social impulse to fight institutional corruption, social inequality and daily violence, as evidenced by the early stages of citizen participation.

Palabras clave

Golpe de Estado, Honduras, democracia, participación ciudadana, movimientos sociales

Keywords

Coup d'état, Honduras, democracy, citizen participation, social movements

Cómo citar este artículo

Pirker, Kristina y Nuñez, Omar 2010 "Cuatro hipótesis y un corolario en torno al golpe de Estado en Honduras" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Si hubo un sentimiento compartido que provocó el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue el de sorpresa. Con la finalización de las guerras civiles en Centroamé-

rica, los estudios sobre las fuerzas armadas, el pretorianismo y el militarismo dejaron de ser temas de interés central tanto en los medios de comunicación como en círculos académicos en esta región. El regreso de los ejércitos a los cuarteles, una importante reducción de efectivos y de presupuesto militar y la ausencia de asonadas militares (incluido el fracasado autogolpe de Jorge Serrano Elías en Guatemala en 1993) en América Central –y en Honduras en particular– constituyeron algunos indicadores con los cuales se sustentaron discursos y enfoques que hablan sobre la consolidación de los procesos de democratización y de la subordinación militar gracias a la expansión de controles civiles. En parte, el predominio de estas posturas explica que los acontecimientos de fines de junio de 2009 en Honduras hayan resultado sorpresivos para diferentes actores y que las lecturas que han hecho de estos eventos giren en torno a hipótesis convencionales que sirven de poco a la hora de comprender las motivaciones, los procesos enmarcadores y la dinámica social y política que posibilitaron la reemergencia del golpismo en Honduras.

El desconocimiento sobre la naturaleza y la dinámica que condujeron al golpe de Estado se expresa en que los procesos inmediatos que llevaron a la destitución forzada de José Manuel Zelaya Rosales, así como los actores e instituciones involucrados, rápidamente fueron reconstruidos y difundidos bajo la óptica de lo político-coyuntural. En cambio, es notable el vacío respecto a explicaciones más profundas e históricas que permitirían ligar la coyuntura del 28 de junio con los procesos políticos y socioculturales de las últimas dos décadas y que llevaron al agotamiento de las reglas establecidas del juego político que datan desde 1982, lo que se expresó tanto en la búsqueda de nuevos aliados por parte de Manuel Zelaya, internamente como en el extranjero, como en la respuesta extra-institucional llevada a cabo por la alianza golpista.

La insatisfacción con las explicaciones coyunturalistas del golpe y el reconocimiento del propio desconcierto con lo sucedido fueron las primeras motivaciones para formular las hipótesis que se presentan a continuación. Su propósito es, por una parte, mostrar las insuficiencias de las explicaciones centradas exclusivamente en las dinámicas de las instituciones formales de la democracia representativa para entender la reciente crisis política y, por otra, contribuir al debate sobre los alcances y limitaciones de los procesos de democratización en Centroamérica.

Hipótesis 1: La coyuntura que se abrió en junio de 2009 en Honduras es un parteaguas para las sociedades, los enfoques analíticos y los sistemas políticos en América Latina.

Si algunas cosas quedaron aun más erosionadas con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, una de ellas ha sido el consenso transitológico que ha dominado a la política y a la academia latinoamericana desde los años ochenta del siglo pasado. Entendido como una estrategia que posibilitaría transitar desde las dictaduras militares hacia gobiernos civiles, su carácter negociado, el hecho de que dependiera de la correlación de fuerzas de los actores partícipes y el de que la noción de democracia manejada tuviera –en la práctica– un carácter instrumental más que sustantivo significaron que los rasgos que moldean al autoritarismo en Amé-

rica Latina quedaran mayormente intocados en sectores clave de las sociedades latinoamericanas.

Resultado del malestar por las recurrentes crisis sociales y económicas, la emergencia de gobiernos con un abierto cuestionamiento al orden neoliberal ha ido de la mano con un incremento en las tensiones políticas e ideológicas entre los actores sociales en pugna (situación, por lo demás, que no se observaba con tanta intensidad desde el fin de la Guerra Fría). En este sentido, el golpe de Estado en Honduras parece anunciar una nueva era en la política latinoamericana, en donde la reemergencia de discursos, tópicos e imaginarios propios del anticomunismo de ayer –como los observados en los sectores golpistas de este país– ha terminado por cuestionar aquellas alocuciones que afirmaban el fin de las luchas ideológicas y la consolidación de la democracia política como espacio de resolución de los conflictos sociales.

La temprana defensa que formulaba Norbert Lechner para que las instituciones, el Estado democrático de derecho y el respeto a las reglas del juego político actúen como mecanismos para la resolución de conflictos en el campo político, expresaba la creencia de que con la transformación institucional se abría un camino para la democratización de las prácticas políticas en América Latina. Nutrido de enfoques analíticos como el institucional y el *rational choice* –y en sintonía con aquellas posturas que creen en la fuerza de las instituciones multilaterales y del derecho internacional en un mundo global– esta perspectiva dominante en la política y en las ciencias sociales ha terminado por constituir un lente oscuro que otorga, por un lado, excesiva racionalidad a los actores y, por el otro, tiende a minimizar la siempre latente conflictividad política e historicidad de los fenómenos sociales. Un ejemplo de estos análisis se encuentra en un artículo de Joseph L. Klesner sobre las dinámicas electorales en el 2006 –año en el cual también Manuel Zelaya asumió el gobierno– quien señaló que “[donde] los sistemas de partidos son relativamente estables, incluso el cambio del liderazgo presidencial rara vez puede alterar drásticamente la dirección política actual y las políticas de desarrollo. [...] El sistema bipartidista de Honduras, el más estable en la región, contrasta escasamente en cuanto a políticas entre los partidos y los candidatos de izquierda reciben muy pocos votos. [...] Por lo tanto, es probable que la política hondureña sufra pocos cambios con la presidencia de Zelaya” (Klesner, 2006).

Por su parte, David Pion-Berlin dejaba traslucir –a un año del golpe en Honduras– sus certezas sobre la fortaleza de las instituciones en la región, como su creencia en que la realidad política impone un comportamiento racional a los actores: “[en] el futuro cercano no creo que se produzcan amenazas militares serias a la democracia y el control civil de las Fuerzas Armadas en América Latina. Los costos de una intervención militar son muy altos y los beneficios demasiado escasos” (Pion-Berlin 2008).

La incapacidad para leer las tensiones sociales contribuyó a que estos enfoques de tipo institucional se vieran sorprendidos por la dinámica de los acontecimientos en Honduras, pero además evidencian los límites para analizar los procesos políticos, dada la racionalidad que atribuyen a los actores políticos insertos en el sistema político formal, en contraposición a los actores sociales que se encuentran al margen o fuera de este último (considerados como expresiones de “nostalgias

populistas, clientelistas, corporativistas o partidistas y, en casos de extrema descomposición, caudillismos neopopulistas”) (Garretón, 2002: 21). Dichos enfoques tienen el inconveniente de no lograr captar los dispositivos históricos, sociales y culturales, así como los marcos contextuales que moldean y posibilitan la reemergencia del autoritarismo y que llevan a los actores políticos y sociales a cuestionar “las reglas del juego democrático” cuando las circunstancias lo exigen.

La propia naturaleza de las modalidades de transición contribuyó a estos desfases entre teoría y fenómenos sociopolíticos. La correlación de fuerzas establecida en los momentos de la transición democrática significó que los sistemas políticos estuviesen moldeados –entre muchos otros factores– por el deseo de las fuerzas armadas de preservar su autonomía y otorgar impunidad o evitar juicios por la violación a los derechos humanos, o por el interés de los poderes fácticos –particularmente empresariales– en limitar el peso político y la capacidad de presión de los movimientos sociales (el obrero en particular), partidos de izquierdas o de grupos populares organizados. Pese a sus distintas trayectorias, los casos de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Honduras o Uruguay (pero también procesos menos convencionales como los de México, Venezuela, República Dominicana o Colombia) atestiguan la existencia de un impulso democratizador atemperado –minimalista– que cuestiona el real alcance de las prácticas políticas democráticas. Lo anterior se tradujo en que la democracia haya terminado por reducirse a una dimensión de carácter procedimental, donde el aislamiento de toda movilización y presión social por parte de las instituciones representativas y de gobierno constituye –paradójicamente– una necesidad para que la misma democracia “funcione”.

En términos políticos, no cabe duda de que esta dinámica regional empezó a cambiar a partir de la formulación del proyecto chavista del “Socialismo del Siglo XXI”, el cual empezó a tensar los límites de las democracias procedimentales al ofrecer una propuesta continental a movimientos populares y dirigentes políticos que buscaban referentes y orientaciones fuera del modelo neoliberal, por un lado, y activar una serie de temores, imaginarios y discursos propios de la Guerra Fría en diversos sectores de los empresarios, iglesias, fuerzas armadas o clases medias, por el otro. Sin embargo, esta explicación exógena –y con marcados tintes conspiracionales– tiene el límite de no percibir las dinámicas que se desarrollan y tejen dentro de las sociedades nacionales y que explican la naturaleza y particularidad de los conflictos existentes y su trayectoria. Por lo tanto, para entender lo que está sucediendo en la actualidad en América Latina resulta central reconstruir cómo esta nueva dinámica regional se articula con lógicas de acción política y dinámicas de conflictos nacionales.

En este sentido, la suerte de la administración de Manuel Zelaya en Honduras evidencia los límites de los gobiernos reformistas aparecidos en la última década y que pretenden impulsar una agenda de cambios (que incluye la revalorización del papel social y económico del Estado) pero que deben convivir con la presión de los viejos y nuevos bloques de poder existente (oligarquías, nuevo empresariado, fuerzas armadas y medios de comunicación). Justamente, la violenta reacción iniciada en el 2002 en Venezuela por algunos de estos sectores, como las acciones desestabilizadoras encabezadas por la oposición provincial en contra del presi-

dente de Bolivia, Evo Morales, o los intentos por articular un bloque de derecha que se opone a la agenda de los gobiernos de los Kirchner en Argentina dan cuenta de un nuevo ciclo de radicalización política e ideológica que parece estar centrada entre una oposición de derecha empresarial y un heterogéneo movimiento de base popular (Durand, 2006).

En el caso estudiado, el hecho que existieran motivaciones ideológicas (miedo al “castro-chavismo” o al “chavismo-comunismo”) y un contexto de intereses en pugna entre los poderes de Estado posibilitó que los sectores golpistas legitimaran un acto de fuerza, negaran las propias normativas constitucionales, incumplieran las reglas internacionales y desdeñaran las condenas de organismos multilaterales como aconteció con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas. Sin embargo, la prensa y los artículos de coyuntura sobre Honduras no han abordado un elemento básico que ayuda a explicar esta polarización: la transición de Manuel Zelaya de ser un candidato y presidente de “centro-derecha” a un gobernante que se autonombra de “centro-izquierda”, cercano a Evo Morales, Hugo Chávez y Daniel Ortega¹. La reconstrucción de la trayectoria de su gobierno permite formular una segunda hipótesis.

Hipótesis 2: El cambio de orientación política del gobierno de Manuel Zelaya fue resultado de lo que podríamos denominar una “toma de consciencia” sobre la situación real en la cual se encontraba el Estado hondureño, que a ojos de su administración hacía casi imposible el gobernar.

La frase alemana “Wir haben keine Chance, also nützen wir sie” (“No tenemos ninguna chance, entonces, aprovechémoslo”) hace referencia a una situación que no ofrece salidas, por lo cual los agentes sociales se ven obligados a *crear* nuevas opciones de acción. En cierto sentido, la frase podría describir las motivaciones que llevaron a José Manuel Zelaya Rosales y su equipo a reorientar estratégicamente sus alianzas, su programa de gobierno y tomar la consigna de la Asamblea Constituyente como sinónimo de transformación de las reglas del juego político. Esta reorientación se vio condicionada, por una parte, por la pérdida de legitimidad que habían sufrido las instituciones estatales, las diferentes ramas de gobierno y el sistema de partidos en los últimos años y, por la otra, por la emergencia de movimientos de protesta que expresaron en el espacio público el difuso malestar ciudadano. Ambos procesos modificaron la *estructura de oportunidades políticas* que caracterizaba al sistema político de Honduras desde la década del ochenta, entendida como el conjunto de relaciones que articulan las instituciones estatales, las ramas de gobierno y el sistema de partidos y el grado de autonomía del aparato estatal respecto de las presiones emergentes de la sociedad civil. Dicho de forma más precisa, este concepto da cuenta de las condiciones de posibilidad (ideológicas, materiales, políticas y simbólicas) que permiten o impiden la acción política a un actor en un contexto determinado.

El enfoque de las oportunidades políticas se ha centrado, por lo general, en estudiar el significado de dichas estructuras para las demandas y dinámicas de los movimientos sociales. Sin embargo, referirnos a esta noción para explicar el com-

portamiento de Manuel Zelaya y su grupo de asesores permite destacar que las acciones de un gobierno también están condicionadas por los límites que imponen las relaciones de fuerza al interior del Estado y de sus instituciones. En este sentido, este concepto constituye una herramienta que posibilita adentrarnos en los factores y en las razones que llevaron al ex mandatario liberal a buscar respuestas prácticas a los desafíos que presentó la profunda crisis del Estado hondureño dentro de un contexto internacional, el cual –por primera vez en tres décadas– permitió visualizar nuevas alternativas políticas para la gestión gubernamental.

Punto de inicio para comprender la evolución política e ideológica del gobierno de Manuel Zelaya lo constituye el hecho de que este y su equipo manejaban un diagnóstico crítico sobre la realidad política, económica e institucional del país desde antes de su asunción –donde la corrupción era visualizada como el principal flagelo que impedía el desarrollo del país. Estando ya en el gobierno, la percepción que se tuvo sobre la crisis integral del Estado hondureño, de las instituciones y de la economía nacional volvió imperativo impulsar una profunda reorganización del aparato público, de las instituciones y del sistema político, medidas no contempladas en el programa original de gobierno. En este sentido, la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que fungiera como un acto de refundación de las bases institucionales y que posibilitara negociar nuevas reglas del juego político constituyó la opción manejada por el ex mandatario y su círculo de asesores para dar solución al crítico estado de las cosas. Dicha lectura tiene asidero en el desborde de la violencia social, criminal y política en el cual se encontraba sumido este país, resultado de la profunda crisis socio-económica, de la descomposición de las instituciones de Estado y de la amplia deslegitimación del sistema político y sus actores –en particular por sus prácticas patrimonialistas y clientelistas, a lo que se suma la propia necesidad política de revertir el escaso apoyo social que las encuestas previas al golpe arrojaban al gobierno.

Un primer componente para comprender la crisis de legitimidad estatal tiene que ver con las secuelas a mediano y largo plazo del huracán Mitch, que azotó Centroamérica en 1998. Con una cifra de muertos y desaparecidos cercana a las 18 mil personas, este fenómeno climático que afectó particularmente a Nicaragua y Honduras significó para este último país la pérdida del 30% de la tierra cultivable, la destrucción del 70% de los cultivos, daños en el 80% de la infraestructura de transporte y comunicaciones y la pérdida de sus viviendas para el 20% de la población (aproximadamente 1,4 millones de los 7 millones de habitantes) traduciéndose en una merma económica estimada en 4 mil millones de dólares para una economía que hoy bordea tan solo los 12,2 mil millones en moneda norteamericana². Si a esto se agrega la inflación interna y el encarecimiento de los alimentos en el mercado internacional en los últimos años, y que afectan a economías pequeñas y carentes de recursos estratégicos propios –como ciertamente es la hondureña–, sin duda estos factores constituyen un serio obstáculo para abordar los históricos rezagos así como para satisfacer las demandas de los movimientos sociales activadas por el impacto del Mitch (solo mitigadas por el incremento en el flujo de remesas desde Estados Unidos).

Otro componente se origina en las dificultades fiscales para hacer frente a los rezagos sociales y viabilizar las precarias bases con las cuales se sustenta la

economía hondureña, las cuales se vieron constreñidas al heredar del ex presidente Ricardo Maduro los problemas financieros y estructurales ocasionados o amplificados por el huracán y que dejaron en evidencia la ineficiencia de las instituciones de Estado para atender situaciones de crisis. Adicionalmente, la capacidad de acción del gobierno se vio limitada por la inicial estrategia económica –de orientación neoliberal–, por la falta de manejo del presidente y de sus asesores a la hora de negociar acuerdos económicos y financieros, por el aislamiento o la incapacidad de construir alianzas para el logro de estos objetivos y, en particular, por las dificultades políticas para acceder a recursos económicos nuevos y en condiciones ventajosas en un contexto internacional volátil a partir de la segunda guerra en Irak. Lo último quedó evidenciado con el fracaso político que significó para Zelaya el no obtener las inversiones requeridas por vía del CAFTA (Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica) en los inicios de su mandato, pese a que la gestión fuera realizada por el propio presidente hondureño en los Estados Unidos entre 2006 y 2007.

El fracaso de las negociaciones está relacionado con la crítica coyuntura económica que el nuevo gobierno encontró al inicio de su gestión y la forma en que fue encarada por las autoridades. A los pocos días de asumir la presidencia, Zelaya Rosales decretó el “estado de emergencia energética” como resultado de la bancarrota financiera en que se encontraba la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (que arrojaba pérdidas anuales superiores a los 3500 millones de lempiras en el 2006, unos 160 millones de dólares de ese año) y de la incapacidad de la misma para abastecer a toda la demanda nacional. La crisis energética en ciernes, que motivó al ejecutivo a asumir directamente el control de la empresa en febrero de 2007, convergió y se potenció con el incremento de los precios internacionales del petróleo observados desde 2002, el cual amenazó con paralizar al dependiente sistema eléctrico hondureño³. La inminente crisis no solo hizo extremadamente difícil plantear una reactivación económica como la prometida por el entonces entrante mandatario, también puso en peligro los recursos nacionales disponibles para el pago de la deuda externa de este país⁴.

En este sentido, debido a que la búsqueda de capitales para la reactivación económica se realizó en paralelo con la puesta en marcha de una conflictiva estrategia de licitación de combustibles para adquirir a menor precio hidrocarburos en el mercado internacional, la obtención de nuevas inversiones se vio dificultada por el conflicto suscitado entre el ejecutivo y las compañías petroleras que controlan el mercado nacional. La implementación de este mecanismo fue resultado de las “recomendaciones” que elaboró una comisión técnica (la Comisión de Notables) designada por el legislativo hondureño para enfrentar la crisis energética, la cual tuvo por objetivo mejorar la distribución de gasolina y abaratar el precio de la misma para el consumidor hondureño⁵. Tales metas implicaban romper el monopolio de la importación, distribución y comercialización de crudo que han tenido las petroleras Esso y Texaco, de capital estadounidense, y la angloholandesa Shell. La decisión del gobierno hondureño de adquirir combustibles por medio de una licitación internacional (en la cual la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. –PDVSA– confirmó su participa-

ción) no solo causó malestar en las compañías citadas sino también en la propia embajada de los Estados Unidos, donde su titular –Charles Ford– explícitamente salió en defensa de los intereses de las corporaciones al declarar que “las reglas del juego han cambiado de la noche a la mañana” para la inversión extranjera. En esa oportunidad el embajador efectuó un “‘llamado’ a un debate nacional sobre el tema, sugiriendo que algunos sectores podrían quedar inconformes con las recomendaciones” de la comisión o de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, sobre todo si se realizaban en una etapa de la historia de Honduras representada por la puesta en marcha del CAFTA⁶.

La presión ejercida por la delegación diplomática estadounidense, las multinacionales petroleras y los empresarios locales en contra de lo que se consideró “una medida intervencionista del Estado” sin duda contribuyó a desacreditar la imagen del mandatario en círculos gubernamentales externos, disminuir el interés de los capitales e inversionistas por hacer negocios en Honduras y alertar al empresariado local sobre las reales intenciones que tenía este gobierno –como se desprende de la advertencia que hiciera el influyente presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, el cual señaló al Ejecutivo “la inconveniencia” de llevar adelante la licitación internacional de carburantes, en razón de que las transnacionales petroleras que operan en territorio Hondureño estarían “en su derecho” de demandar al Estado por una suma de 300 millones de dólares.

La respuesta formulada por el propio ex-presidente es indicativa de la naturaleza del conflicto emergente, del grado de tensión tempranamente alcanzado entre el Ejecutivo y los poderes fácticos y del desplazamiento discursivo que posteriormente caracterizará a este gobierno, es decir, de una primera defensa del mercado abierto hacia la promoción de un nacionalismo económico en contra de los monopolios multinacionales: “Estas transnacionales –señaló Zelaya– están opuestas a que esta licitación se lleve a cabo, porque estaban acostumbradas a gozar de privilegios, a mantener ese control que les ha permitido no competir en la exportación y comercialización de los derivados del petróleo. [...] Me extraña también que algunos empresarios que deben ser voceros del libre mercado y de la competencia estén opuestos a que Honduras salga al mercado internacional para buscar mejores precios para la compra de combustibles” (Zelaya, 2006).

Por lo tanto, si la estrategia de reactivación y crecimiento económico dependía tanto de la adquisición en el mercado internacional de nuevas inversiones como del abaratamiento en los precios de los combustibles, esta quedó restringida por los obstáculos políticos formulados en el CAFTA, por la presencia de un mercado oligopólico que no escatimó esfuerzos en presionar para velar por sus intereses privados y por el escaso apoyo brindado por el empresariado nacional al gobierno. Visto desde esta perspectiva, la agenda gubernamental de origen neoliberal encontró sus límites al quedar en evidencia las dificultades políticas para acceder a un mercado internacional abierto y competitivo, al chocar con los intereses de los grandes capitales y carecer de los necesarios respaldos políticos nacionales. En este sentido, el camino hacia la “toma de consciencia” y el cambio de paradigma que condujo a este gobierno y su presidente del neoliberalismo a

un difuso nacionalismo económico se asienta, irónicamente, en una defensa del consumidor y del libre comercio global; al tiempo que la incapacidad para conseguir apoyos o construir alianzas –sea dentro de su propio partido, sea en sectores estratégicos del país– evidenció que sin ellas es difícil avanzar en una agenda de reformas económicas, políticas y sociales. Con base en estos antecedentes, no caben dudas sobre el hecho de que la coyuntura de los años 2006 y 2007 constituyó un parteaguas en la transición política e ideológica por la cual el gobierno hondureño redefinió sus alianzas y sus prioridades; pero para que este proceso tomara fuerza fue clave la percepción de que el país se encontraba al borde de un colapso institucional y político.

**“...la coyuntura de los años 2006 y 2007
constituyó un parteaguas en la transición política
e ideológica por la cual el gobierno hondureño
redefinió sus alianzas y sus prioridades...”**

En este sentido, un tercer componente a tomar en cuenta para entender la profunda crisis de legitimidad política ha sido la imposibilidad del Estado hondureño de proveer a la sociedad de seguridad en un amplio sentido y conservar para sí el monopolio de la violencia. El desborde de las instituciones públicas por el incremento de la delincuencia organizada se manifestó en el incremento de las extorsiones, secuestros, ajusticiamientos y masacres cotidianas, que se tradujeron en el asesinato de 5.253 personas para el año 2009 –lo que hizo saltar la cifra de homicidios diarios de 10 personas en 2007 a una de 14 para el 2009 (léase Pineda, 2010). Frente al socavamiento de los cuerpos policiales por la delincuencia, la impotencia del Estado en contener al crimen organizado ha contribuido a una privatización de la seguridad pública, expresada en el crecimiento del número de compañías privadas de vigilancia (muchas de ellas fundadas por militares retirados) y en la organización de comités de protección locales en los barrios (formados por policías, alcaldes, miembros de la Cámara de Comercio e incluso feligreses de iglesias evangélicas) que a ojos de sus propios integrantes permite “seguridad por mano propia”. La crisis de seguridad alcanzó al propio entorno del presidente Manuel Zelaya con el asesinato de uno de sus tres edecanes militares, Alejandro Motiño, pariente del propio mandatario muerto en la mañana del viernes 21 de junio de 2007. Los innumerables casos de violencia y complicidad llevaron a diversos autores a formular la hipótesis de que se estaba ante la consolidación de un “Estado criminal”, en razón del elevado grado de impunidad con el cual se cometen crímenes y por los evidentes vínculos tejidos entre las instituciones policiales y la criminalidad organizada. Estos vínculos constituyen una expresión de la elevada descomposición política, institucional, económica y social en la cual se ha sumido este país, escenario que constituye un espacio propicio para que los poderes fácticos manejen directa o indirectamente las formas y los mecanismos de la política y del poder.

El malestar social con estos espurios lazos alcanzó un punto central con la huelga de hambre entablada por un grupo de fiscales en el propio palacio legis-

lativo el 7 abril de 2008, los cuales denunciaron la falta de independencia de los magistrados nacionales y las connivencias existentes entre estos y las actividades criminales. El apoyo social a esta causa se tradujo en la formación del Movimiento Amplio Popular por la Dignidad y la Justicia (MAPDJ), que aglutina a organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, gremiales, religiosas y patronales, y que tuvo como propósito luchar contra la corrupción en todos los niveles e incidir en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, al igual que en los procesos electorarios para la presidencia, alcaldes y diputados al Congreso Nacional, para así democratizar y transparentar la designación de sus integrantes. Teniendo por principios la resistencia pacífica y ciudadana, el MAPDJ se erigió en los hechos en una instancia de contraloría ciudadana “al funcionamiento de las autoridades de las instituciones públicas vinculadas al sector de la justicia”⁷.

Los problemas de seguridad y de descomposición de las instituciones de Estado tienen su correlato en la profunda crisis de legitimidad del sistema político y de sus partidos. En opinión del analista político Ismael Moreno, el creciente abstencionismo electoral que ha caracterizado a este país es resultado del “desencanto ante la práctica deshonesto y oportunista de los actuales partidos”. Recogiendo una encuesta elaborada por una universidad estadounidense, señala que el 52% de los consultados se ha desafiado de los partidos políticos en los previos seis años, al tiempo que los mismos entrevistados no aceptarían sumarse a un nuevo conglomerado partidario.

“Con unos 30 años de elecciones y alternabilidad en el poder de liberales y cachurecos –sinónimo para los militantes del Partido Nacional– la gente sigue sin lograr entender ni poder explicar qué es la democracia. Para los hondureños, los partidos políticos y el sistema de justicia son las instituciones con menos credibilidad. Sin embargo, los líderes políticos y los jueces se hicieron un racimo en torno a la elección de las autoridades responsables de impartir justicia. Las elecciones primarias de los partidos en noviembre de 2008 dejaron una advertencia: cerca del 70% de las personas con derecho a votar no se acercó a las urnas y de acuerdo a la investigación de la misma universidad un 70% dijo que no irá a depositar su voto en las elecciones generales que se celebrarán en noviembre de 2009. Los líderes políticos conocen estos datos. Sin embargo, siguen como los perros mañosos: quemándose su propio hocico”⁸.

En consecuencia, la debilidad de las instituciones del Estado y la crisis de legitimidad del sistema político implicó que los elementos permanentes que inciden en el juego y en la estructura de oportunidades políticas cedieron espacios a los componentes variables del mismo, es decir, aquellos que dan cuenta de la cohesión de las élites, la posibilidad de realineamientos electorales, la disponibilidad de alianzas, las dinámicas de interacción entre gobierno y ciudadanos, las estrategias de resolución de conflictos, el ambiente internacional o la interacción entre movimientos sociales y los actores políticos formales, lo que abrió la posibilidad al Ejecutivo de buscar alternativas políticas, sociales e ideológicas para enmendar y redireccionar el rumbo de su gestión. Esta hipótesis permite formular una adicional relacionada con las modificaciones de la estructura de oportunidades políticas⁹:

Hipótesis 3: Un rasgo decisivo de las modificaciones de la estructura de oportunidades políticas fue la emergencia de un conjunto de movimientos sociales que, desde 2001 y 2002, ganaron cada vez más presencia en el espacio público e incidieron en la redefinición política y económica del gobierno de Manuel Zelaya.

Las dimensiones de la crisis de legitimidad estatal señaladas en la sección anterior hicieron que el creciente pero heterogéneo malestar ciudadano se tradujera en la emergencia de un movimiento social a partir de 2001 y 2002. En más de una oportunidad, Zelaya, como los presidentes anteriores, tuvo que hacer frente a las movilizaciones convocadas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) –organización que aglutina a diversas entidades sindicales, campesinas, magisteriales, estudiantiles e indígenas, entre otras– que exigía al gobierno un petitorio amplio que incluía la derogación de las leyes de minería que favorecen a las grandes compañías y de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento, aprobada en 2003, que estipulaba la municipalización del servicio y su privatización. Además, esta organización social planteó la necesidad de que el Estado estableciera un control de precios ante el encarecimiento de los productos básicos que experimentaba el país, así como la suspensión de todos los proyectos de construcción de represas hasta que se definiera una propuesta que se sostuviera sobre la protección del medio ambiente, entre muchas otras demandas (Léase CNRP, CUTH y CGT, 2007: 69). Se agregaron reclamos históricos del movimiento sindical del sector público por la puesta en práctica del Estatuto del Docente y del Estatuto del Médico Empleado instituido por el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997), los cuales, sin embargo, nunca se implementaron por falta de recursos fiscales. En este sentido, la movilización nacional del 27 y 28 de agosto de 2007, como la del 12 de octubre subsiguiente, se inscribieron en ese proceso de reorganización y movilización social que tiene su punto de arranque en la denominada Marcha de la Dignidad, ocurrida en Tegucigalpa en agosto de 2003¹⁰.

Si bien el mandatario hizo caso omiso a las movilizaciones sociales más de una vez –e incluso la policía reprimió algunas de las marchas convocadas– la necesidad de hacer frente o de dar respuestas a algunas de las problemáticas que buscaba atender la difusa agenda gubernamental provocó una temprana tensión entre el Ejecutivo, los intereses empresariales y el Poder Legislativo. Por ejemplo, a inicios de 2007 miembros de cuarenta organizaciones agrupadas en la Alianza Cívica por la Democracia realizaron movilizaciones a fin de que el gobernante liberal tomara cartas sobre los daños medioambientales provocados por la explotación minera a cielo abierto. Las medidas de presión también estuvieron dirigidas a exigirle al Congreso Nacional la derogación del Decreto 292/98 que contiene la Ley General de Minería, al tiempo que se solicitaba la aprobación de una nueva legislación que estableciera el pago de impuestos, la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental y la prohibición de expropiar terrenos para entregárselos a las empresas mineras¹¹. El gobierno de Manuel Zelaya hizo eco a esta demanda y rechazó en repetidas oportunidades las solicitudes de la industria minera para otorgar nuevas concesiones a las empresas en tanto no existiera una ley que obligara a las compañías a realizar estudios sobre los impactos medioambientales –pese a

que en el año 2005 el Congreso del país planteó la posibilidad de permitir nuevas concesiones a la minería metálica a través de reformas legislativas.

En este sentido, la búsqueda de nuevas opciones de acción política también parece ser el resultado, por un lado, de una modificación en los patrones que inciden en la interacción entre los diversos sectores y de estos últimos con las instituciones y, por otro, de un cambio en los factores que imponen una lectura del contexto político o que otorgan un sentido común al orden sociopolítico. Dicho de otra manera, si las alianzas entre las nuevas y viejas organizaciones populares son un reflejo de la deslegitimación de las instituciones públicas, esta crisis de representación puede traer aparejado un cambio en la correlación de fuerzas de la sociedad con las instituciones y entre las instituciones, así como una modificación de los imaginarios y las matrices ideológicas de sus integrantes. Justamente, es este cambio en la percepción del estado de las cosas lo que posibilita ensanchar los límites políticos, programáticos e ideológicos hasta entonces consensuados o hegemonizados por los actores formales del sistema de representación ciudadana, pero también traspasar las fronteras de la política convencional (lo políticamente correcto) al estimular la radicalización de los discursos, fomentar prácticas políticas alternativas o generar nuevas alianzas sociales.

En consecuencia, a medida que la realidad nacional fue imponiendo una lectura nueva sobre cómo gestionar la crisis económica y de Estado, la promoción de un cambio en el sistema político y sus instituciones, en las prácticas políticas tanto formales como informales o en el modelo económico constituyó el horizonte alternativo que la estructura de oportunidades políticas puso a disposición de los actores cuando se modificaron los marcos de referencia que hasta entonces otorgaban ciertos límites a la acción política. Quizá sea esta hipótesis la que en parte explique por qué un Ejecutivo con una inicial agenda neoliberal optara por redireccionar política y económicamente el destino del país y que para la consecución de estos fines requiriera de la constitución de un nuevo bloque de aliados nacionales como de inesperados respaldos políticos internacionales, aun a sabiendas de que tales medidas tensionarían su relación con la clase política, el Congreso Nacional, los empresarios, los capitales externos, las fuerzas armadas e incluso con las iglesias católica y evangélicas.

Si bien la construcción de este nuevo bloque de aliados parecía difícil, dados los conflictos que la propia administración de Zelaya tuvo con los grupos populares organizados, la construcción de una nueva coalición de gobierno parecía posible por los intereses comunes que existían con varias de estas agrupaciones y por el hecho de que las mismas se encontraban en conflicto con los poderes formales y fácticos del país, lo cual potencialmente las transformaba en aliadas estratégicas. Esta opción implicaba enviar señales claras de un nuevo compromiso del Ejecutivo hacia los sectores populares organizados y la izquierda hondureña, entre las que podemos nombrar el creciente acercamiento del gobierno a las administraciones antineoliberales de Centro y Sudamérica, la participación de Honduras en Petrocaribe y la adhesión de este gobierno a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), al igual que medidas de gran impacto social como fue el incremento del salario mínimo de hasta un 60%, promulgado por la vía del decreto ejecutivo después de que los empresarios y trabajadores no

podrían ponerse de acuerdo en las negociaciones para fijar el techo de ingresos a fines de 2008¹². Estas medidas políticamente conflictivas inevitablemente contribuirían a tensionar aun más la relación del gobierno con los poderes políticos y fácticos, pero su puesta en marcha reflejó la redefinición de los marcos políticos e ideológicos hasta entonces consagrados.

Empero, la búsqueda del gobierno de Manuel Zelaya de nuevas alternativas que permitieran atender los problemas acumulados paradójicamente no fue el resultado de una correlación de fuerzas favorable al gobierno, sino de una situación de aislamiento social y político solo posible de ser aprovechada debido a la extrema rigidez y cerrazón del sistema político, el alto grado de deslegitimación de los actores políticos formales y las divisiones que cruzan a las élites y sus partidos. En efecto, para explicar la opción tomada de acceder a recursos financieros y en especie, como el petróleo, al igual que apoyos políticos, en una instancia como es la ALBA y su instrumento medular, Petrocaribe, resulta clave comprender que las opciones abiertas por la estructura de oportunidades políticas pasaban por una reinterpretación de los factores que imponían límites ideológicos o que encuadraban el sentido común del orden sociopolítico y su modelo económico imperante, por la percepción de que el país se encontraba en una situación de crisis extrema que requería de un viraje político estratégico y por la aparición de un mercado alternativo que posibilitaba el acceso inmediato y en condiciones ventajosas a los urgentes recursos demandados¹³.

Curiosamente, esta problemática también la observamos durante el gobierno del ex presidente hondureño Ricardo Maduro (2002-2006), quien llegó a un diagnóstico similar al formulado por Manuel Zelaya, pero al igual que el ex presidente argentino, Fernando de la Rúa, fue incapaz de trascender los paradigmas político, económico e institucional para direccionar estratégicamente al país. Perteneciente al Partido Nacional, Maduro llegó a la presidencia con la promesa de realizar los cambios que el país demandaba, incluida una transformación del sistema político-electoral y sus instituciones, pero a poco andar su gestión quedó entrapada por la oposición de la clase política atrincherada en el poder Legislativo, el escenario económico adverso y la propia inanición del Ejecutivo. Además de heredar el grave estado de las finanzas dejado por la administración de Carlos Flores (1998-2002), este gobierno atestiguó el incremento en la percepción ciudadana de la corrupción en el país y el aumento en el malestar social por la crisis económica –amplificada, como se señaló, por el paso del Mitch– y por enfrentar un conflicto con el Fondo Monetario Internacional en relación con las condiciones que este organismo imponía para acceder a recursos financieros externos. En opinión de Manuel Torres Calderón, aceptar las condiciones era para esta administración “[...] pasar de las brasas al fuego: una de las exigencias era reducir el 10% del gasto destinado a la burocracia, pero ello implica dejar en la calle a miles de empleados públicos; otra de las demandas era eliminar los estatutos laborales que regulan el pago a maestros y médicos, pero ambos gremios se resisten a ser víctimas de un sacrificio que no ofrece nada a cambio. Para Maduro el desacuerdo con el Fondo no es de contenido, sino de aplicación”. A este conflicto se sumó la creciente oposición entablada por el Congreso Nacional a cualquier intento de reforma política y social que este gobierno in-

tentó promover, fuese vetando las iniciativas, fuese alterando su contenido, fuese postergando el debate de tal forma que los tiempos legislativos las volvieran políticamente inviables. Teniendo por objetivo “aislar a la sociedad política” de la “sociedad civil”, las acciones del Legislativo y de la clase política significaron que reformas claves como la introducción de las figuras del plebiscito y referendo, las elecciones de diputados por distrito, la disminución de requisitos a las candidaturas independientes o la promoción de mecanismos para facilitar las alianzas políticas y profundizar la democracia en el país quedarán postergadas. “A estas alturas –concluye Manuel Torres Calderón– es evidente que Maduro no pudo o no intentó romper con esa visión y esa argolla del poder, y al renunciar a ese objetivo redujo su propio espacio de acción. [...] Cambiar este cuadro ameritaba un golpe de timón por parte de Maduro en la conducción político-económica, pero esta acción no se produjo. El presidente en cambio optó por más de lo mismo...” (Torres Calderón, 2003: 16-18).

“...el programa reformista de Modesto Rodas refleja los cambios en la cultura política y en la correlación de fuerzas sociales provocados por la huelga de los 69 días de los trabajadores de la Tela Railroad Company –antigua United Fruit Company– en 1954”

La trayectoria y la lectura seguida por el gobierno de Ricardo Maduro tiene similitudes con la realizada por Manuel Zelaya y su gabinete, pero a diferencia del contexto que marcó la gestión del mandatario liberal, la administración nacionalista no tuvo en disposición una estructura de oportunidades políticas que estimulara u ofreciera salidas a su entrampada gestión. Si bien en sus inicios la administración de Zelaya no priorizó la construcción de un nuevo equilibrio político, como sí lo hiciera la de Néstor Kirchner, el bajo respaldo ciudadano con el cual fue elegido (que a todas luces le otorgaba un mandato político débil, sobre todo si estaba entre sus objetivos el aplicar reformas) y el aislamiento creciente frente a la clase política y a los poderes legislativos y fácticos volvió imprescindible la construcción de una alianza que hiciera posible el cumplimiento de los objetivos de gobierno y su estabilidad¹⁴.

Sin embargo, para que este presidente optara por acercarse a los sectores populares organizados, aliarse con los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, y afiliarse a la ALBA –en vez de intentar reproducir las recetas neoliberales–, también tenían que existir ciertas disposiciones ideológicas que lo posibilitaran. De ellas trata la siguiente hipótesis.

Hipótesis 4: La opción del gobierno de Manuel Zelaya tiene que ver con la trayectoria política de una corriente interna del Partido Liberal que lo acompaña: Los Patricios.

La reorientación ideológica y política del gobierno de Manuel Zelaya no se puede explicar sin considerar el papel jugado y la trayectoria previa de un grupo clave

de asesores del depuesto presidente: Los Patricios. Surgidos como una corriente al interior del Partido Liberal, esta fracción integrada por Arístides Mejía (ex vicepresidente designado de Honduras), Milton Jiménez (ex ministro de Relaciones Exteriores y ex comisionado de Bancos y Seguros), Enrique Flores Lanza (ex ministro de la Presidencia) y Raúl Valladares (ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones), entre otros, debe su nombre al liderazgo que ejerce Patricia Isabel Rodas Baca, quien fuera presidenta de la organización partidaria y última canciller del gobierno de Manuel Zelaya. Hija menor del caudillo liberal Modesto Rodas Alvarado, su formación y socialización política están marcadas por el impacto familiar que significó el golpe militar del 3 de octubre de 1963 para evitar que su padre ganara la contienda presidencial de ese año. Visto como una respuesta autoritaria del Partido Nacional, de las élites más conservadoras, del Ejército y de las compañías estadounidenses al programa de reformas sociales y económicas encabezadas por su padre, la trayectoria de Patricia Rodas se inscribe en la corriente ideológica dominante en la historia del Partido Liberal e instituida en los propios estatutos de este grupo político: el “liberalismo social”.

Emparentada con el “gaitanismo” de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado en Colombia, el programa reformista de Modesto Rodas refleja los cambios en la cultura política y en la correlación de fuerzas sociales provocados por la huelga de los 69 días de los trabajadores de la Tela Railroad Company –antigua United Fruit Company– en 1954. Esta huelga, pese a su derrota, se convirtió en un referente simbólico importante para los movimientos sociales y la izquierda hondureña debido a que el movimiento obrero logró dar un impulso a la modernización en las relaciones sociales, al lograr el reconocimiento a la libertad y el derecho a la sindicalización y al posibilitar la conquista y ampliación de derechos sociales y políticos (de hecho, el voto femenino fue otorgado en 1955). Estos logros se tradujeron en la promulgación de un Código Laboral y una Ley de Seguridad Social y de Reforma Agraria y en la creación de instituciones como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otras iniciativas (Torres Calderón, 2009). Promovidas bajo el gobierno liberal de Ramón Villeda Morales (1957-1963), en su elaboración y defensa tuvo un papel importante la figura de Modesto Rodas, quien adoptara una postura que le permitió posicionarse políticamente para ser el seguro ganador en las fallidas elecciones de fines de 1963¹⁵.

El exilio de Rodas en Nicaragua posibilitó a su hija –años más tarde– simpatizar con la lucha social entablada en contra de la dictadura de los Somoza y acercarla a las ideas de los movimientos de liberación nacional. A principios de los ochenta –de regreso del exilio– participa en las luchas estudiantiles universitarias hondureñas, apoya la revolución sandinista y enarbola la bandera por la recuperación de la unidad centroamericana promovida históricamente por los líderes liberales de stirpe morazanista. Sin embargo, dos elementos incidirán en las motivaciones y en la evolución política de la futura canciller: la “traición” del ex presidente Roberto Suazo Córdova (1982-1986) al programa político para la Honduras post autoritaria visualizado por el histórico líder liberal¹⁶ y el hecho de apoyarse este mandatario en los sectores más conservadores de su partido a la hora de dirigir el país, medida que incluyó al ex ministro del Trabajo del ex presidente Ramón

Villeda Morales, Oscar A. Flores, cómplice del golpe de 1963 y padre del ex mandatario Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002), también partícipe del golpe de junio de 2009. “Para Patricia Rodas –señala Ismael Moreno– todos eran unos impostores: un presidente que ocupaba un lugar que se debía a su padre y un ministro de la Presidencia en la silla que se debía al menos a alguien de la estirpe directa de Modesto Rodas” (Moreno 2007). Es probable que este acontecimiento revele un “resentimiento” de la hija de Rodas hacia una parte de la clase política –lo que explicaría, en opinión de este autor, su radicalismo ideológico– pero leído desde otro punto de vista, este señalamiento deja traslucir la importancia de las redes familiares en las élites partidistas para condicionar trayectorias políticas y que, en un caso individual como el de Patricia Rodas, se expresa en su motivación de llevar a cabo el proyecto de país doblemente abortado de su padre.

De esta manera se explica por qué la entrada de Patricia Rodas al campo de la política formal se realizó desde el Partido Liberal y no desde la izquierda. Papel clave en este acercamiento le correspondió a Carlos Roberto Reina, representante del ala progresista de este partido y presidente del país entre 1994-1998, quien en 1993 reclutó a un grupo de profesionales venidos de la izquierda (algunos de ellos ex alumnos universitarios del propio Reina) con el objetivo de ampliar sus bases de apoyo para su campaña presidencial y conformar un grupo de trabajo de cara a una eventual gestión gubernamental¹⁷. Este acercamiento es posible de explicar no solo porque existían afinidades entre el programa de gobierno de Carlos Roberto Reina con las preocupaciones sociales y políticas de este futuro grupo de asesores, sino también por el hecho de que primó en estos profesionales cierto pragmatismo político de época, dada la crisis de los regímenes comunistas y de los metarrelatos socialistas que hacían inviable pensar en una alternativa autónoma desde la izquierda; por lo que estaba la creencia de que ocupando posiciones claves en este partido, en el gobierno y en instituciones del Estado se podían llevar a cabo los cambios que el país requería (incluso si para ello hubo que aliarse con el ala derechista del partido liderada por Carlos Flores Facussé, cuando este fue candidato en 1997 y presidente del país entre 1998 y 2002).

Sin embargo, este grupo de asesores compartía también una cierta predisposición “ideológica” –moldeada por el ambiente revolucionario de los ochenta y reactivada con los procesos sociales y políticos que han caracterizado a la primera década de este siglo en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela– que posibilitaría tender puentes valóricos, conceptuales y políticos con los discursos de los mandatarios de dichos países al igual que lazos entre los objetivos de gobierno y las políticas desarrolladas por los gobernantes de la ALBA y entre las medidas implementadas por estos ejecutivos y la lectura realizada a la hora de enfrentar los obstáculos políticos y económicos comunes. Por lo tanto, no es ninguna coincidencia que el acercamiento del gobierno de Zelaya a la ALBA se realizara en el contexto de la vigésimo octava celebración de la Revolución Sandinista, llevada a cabo en Nicaragua en julio de 2007, oportunidad en que Manuel Zelaya y Patricia Rodas acompañaron al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, en los festejos. En este sentido, el rol jugado por Los Patrios puede enmarcarse dentro de un fenómeno general en la política de América Latina de la última década: la presencia de una generación de militantes políticos

y activistas sociales que participaban en las luchas antidictatoriales y en los movimientos revolucionarios de liberación nacional en los años sesenta y setenta (en el Cono Sur) y ochenta (en América Central) y que ahora forman parte de los gabinetes y administraciones de los gobiernos de izquierda y/o progresistas en el continente, siendo el caso de los ex montoneros en la administración de Néstor Kirchner un ejemplo paralelo de estas trayectorias.

Será a partir de 1993 que esta generación de jóvenes políticos inicie su “marcha por las instituciones”, derrotero que les permitirá ocupar lugares por los cuales incidir en la orientación programática e ideológica del partido y del gobierno. Este camino institucional los entroncará con la figura de Manuel Zelaya, quien desde la administración de Carlos Roberto Reina –y esto también cabe como una hipótesis de trabajo– ocupará cargos públicos que lo irán vinculando con representantes del movimiento popular y de la denominada sociedad civil, lo que incidirá en un conocimiento más cercano de la realidad social, modificando con ello sus matrices ideológicas y su discurso político. El nombramiento como director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) en 1994 permitirá a Zelaya ejecutar programas gubernamentales de promoción social, lucha contra la pobreza y descentralización de las administraciones locales. Ya para entonces el futuro mandatario vertió críticas a las condiciones impuestas por el FMI para acceder a una línea de crédito, las cuales hizo extensibles al ajuste liberal impuesto al presidente Carlos Roberto Reina. A pesar de lo anterior, estableció un diálogo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual permitió financiar los proyectos del FHIS. Alabado su desempeño por estas instituciones, no extraña que fuera designado vicepresidente de la Red Social de América Latina y el Caribe (REDLAC) en 1996, la cual agrupa fondos de inversión social o de emergencia de los países del continente y cuyo propósito es poner en ejecución programas y proyectos que permitan mejorar la eficiencia, eficacia y equidad de las acciones sociales. Confirmado en el nuevo gabinete de gobierno por el entrante presidente liberal Carlos Flores Facussé, la catástrofe provocada por el paso del huracán Mitch en octubre de 1998 posibilitó que su experiencia técnica en materia social fuera considerada para integrar el Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional instituido al mes siguiente de la crisis. Aquel año tomó asiento también en el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), un marco en el que representantes del Estado y de la sociedad civil debatían las diversas políticas nacionales¹⁸.

La influencia del pensamiento liberal progresista y de una visión particular de izquierda puede observarse en el programa de gobierno del Manuel Zelaya denominado “Visión del poder ciudadano para transformar Honduras”, dado a conocer en noviembre de 2005, así como en la puesta al día de los estatutos de este instituto político y que lleva por título “Declaración de Principios, Estatutos y Plan de Acción Política”, firmado el 28 de mayo del mismo año. Teniendo como objetivo común la promoción de un “poder ciudadano” –bandera que expresa la necesidad de empoderar y acercar el Estado a la ciudadanía–, esta propuesta es una expresión ecléctica de las credenciales liberales y leninistas que conviven tensamente en sus promotores. Lo anterior se observa en las propias palabras de Patricia Rodas escritas en la hoja de presentación de este último documento:

Fieles a nuestro compromiso de renovación permanente, los principios y objetivos que configuran a la organización de nuestro Instituto Político consolidan su misión de vanguardia de la sociedad hondureña a través del fortalecimiento de todas las formas de representación y de la necesaria construcción de una cultura de participación, transparencia y rendición de cuentas, atributos paradigmáticos del proyecto del Poder Ciudadano que con firmeza y dignidad dirige nuestro presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales. El cuerpo de ideas, derechos y obligaciones aquí plasmados debe orientar la conducta de todos los militantes y el accionar orgánico de nuestro glorioso Partido Liberal de Honduras hacia la unidad granítica de todas sus fuerzas y la absoluta articulación de todos sus esfuerzos. En la profundidad de su conocimiento y en su correcta interpretación y aplicación debemos alcanzar con lealtad la perfección de nuestros actos y cumplir sin demora la tarea de encaminar nuestro destino hacia la plenitud del desarrollo y la vida digna y fecunda para todo nuestro pueblo.¹⁹

No obstante, la explícita intención de combatir la corrupción en tanto principal mal de la sociedad hondureña permite señalar que el programa de gobierno de José Manuel Zelaya Rosales se inspiró, en un primer momento, en un discurso afín a la socialdemocracia y difundido por los organismos internacionales sobre las estrategias políticas y administrativas necesarias para que las democracias latinoamericanas recuperaran la legitimidad cuestionada a raíz del costo social de las reformas económicas y por la reproducción de prácticas corruptas en los Estados neoliberales, estrategias que giran en torno de los términos “transparencia”, “acceso a la información” y “rendición de cuentas” (accountability). En estos términos se cruzan dos conceptualizaciones: una tecnocrática, que limita su significado a la obligación estatal de informar a la sociedad sobre las acciones y decisiones gubernamentales para hacer más eficiente el gobierno, y otra, comprometida con un proyecto participativo, que los visualiza como herramientas para ampliar la democracia y realizar derechos económicos y sociales²⁰.

En el discurso programático de Zelaya, la noción de rendición de cuentas terminó por ocupar un lugar estratégico por ser considerada no solo como una herramienta para hacer más efectiva la gestión pública y estatal, sino como un instrumento clave en el combate al círculo de corrupción formado por las actividades privadas, instituciones públicas y el sistema político. En este sentido, si la corrupción es responsable de la debilidad institucional, minar toda estrategia y/o programa de desarrollo, propiciar un desigual trato ante la ley y, por lo tanto, de incrementar la inequidad social y debilitar las bases de toda ciudadanía, la promoción de la contraloría ciudadana o accountability fue visualizada como el pilar político por el cual se otorgaría sustento al proceso de desarrollo económico y democratización política y social en Honduras²¹.

Considerando la baja participación ciudadana en las elecciones de 2005, que bordeó apenas el 50% del padrón electoral (y la aun menor cantidad de votos que recibió el propio Manuel Zelaya), es evidente que esta convocatoria no tuvo un impacto inmediato en elevar las expectativas sociales y generar adhesión ciudadana. Si bien también es cuestionable el real alcance que pudo tener la implantación de esta propuesta y todo el programa de gobierno, el mero hecho de poner en circulación la idea de una “contraloría ciudadana” constituía –sin embargo– un potencial conflicto en el sistema político hondureño en la medida en que dejaba en evidencia el principio negativo con el cual se erige la arquitectura del mismo: la ausencia de mecanismos de control hacia la “cla-

se política” por parte de la “sociedad civil”. Del mismo modo, la intención de combatir las prácticas que favorecen la evasión fiscal, la corrupción administrativa o la impunidad criminal constituyó otro escenario de posibles tensiones al alimentar un discurso que identificaba la degradación de la democracia con el poder de los grupos dominantes, la corrupción institucional con la de los intereses privados, la de la clase política con los altos negocios. En consecuencia, al propiciar la acción y el activismo social, legitimar el empoderamiento ciudadano y fomentar un programa de anticorrupción, la administración de Zelaya creó una veta política e ideológica que otorgó carta de legitimidad a las diversas movilizaciones ciudadanas existentes, al tiempo que explícitamente conectó e identificó a la clase política y a los poderes fácticos como los principales responsables de los males que aquejan al país centroamericano²². Patentizado con la oposición empresarial y parlamentaria a las propuestas de reformas social y política emanadas desde el Ejecutivo y por el apoyo brindado por los mismos actores al golpe de Estado de junio de 2009, ambas acciones evidenciaron el carácter antidemocrático, corrupto y elitista con el cual opera el sistema político en este país.

A la luz de estos antecedentes, el acercamiento hacia los sectores populares y al bloque de países denominados bolivarianos no puede ser explicado tan solo por un imperativo pragmático para salir del aislamiento político o escapar a la crisis energética (aun menos si se asume la convencional tesis sobre la “conspiración chavista” y “orteguista” que habría penetrado en el seno del gobierno), sino porque del encuentro de Zelaya con el grupo de los Patricios nació un discurso político basado en una recuperación selectiva del liberalismo progresista hondureño y de ideas (socialdemócratas) de gobernanza democrática (como “ciudadanía”, “rendición de cuentas” y “contraloría ciudadana”) que fueron combinadas con las imágenes gloriosas y heroicas de la revolución sandinista de la década de los ochenta. Esta amalgama de discursos e imágenes, que a los ojos del observador externo podría parecer difuso e incluso incoherente, logró interpelar a los sectores populares organizados al vincularse con la promesa de una Reforma Constitucional orientada a reformular las reglas del juego político y abrir el campo político hondureño a la participación ciudadana.

Corolario

Visto retrospectivamente, es posible observar un conjunto de factores que modificaron al sistema político de Honduras entre 1998 y 2009, posibilitando que Manuel Zelaya y su gabinete impulsaran una propuesta para cambiar las reglas del juego político en su país. De estos factores destacamos los impactos de mediano plazo del huracán Mitch, la violencia social y el desborde de la criminalidad organizada, que evidenciaron la ineficiencia de las instituciones de Estado, los obstáculos políticos y económicos de su administración para acceder a recursos en el mercado internacional, el aislamiento en que esta quedó frente a la clase política y empresarial del país, la presión social en ascenso y los niveles más bajos de legitimidad del sistema político y sus actores desde que hace más de un cuarto de siglo se iniciara el periodo democrático.

Pese a los cambios provocados por estos factores, las tensiones que provocaron las acciones del gobierno liberal en el sistema político hondureño, como en los grupos empresariales del país –que llevaron finalmente al golpe de junio de 2009–, también expresan el carácter limitado que tuvieron las modificaciones en la estructura de oportunidades políticas, las cuales no afectaron las relaciones de fuerza entre los principales grupos sociales. En este sentido, el no reconocer a tiempo el reducido margen de maniobra que los poderes fácticos le habían concedido o el hecho de sobrevalorar el peso de los apoyos políticos y materiales externos, así como las posibles alianzas internas para dotar de viabilidad política a su gobierno, fueron algunos de los condicionantes cuya errónea lectura costó a Manuel Zelaya la presidencia.

Es probable que la correlación de fuerzas a favor de los sectores oligárquicos y militares en este país sea resultado de una trayectoria política y de procesos sociales que les otorgaron mayores cuotas de poder al momento de la transición política; sobre todo si lo comparamos con lo acontecido en otras realidades centroamericanas. Lo anterior explicaría tanto la rigidez del sistema político como la pública intolerancia ideológica de estos grupos a cualquier asomo de cambio en las reglas consagradas del juego político. Consecuencia de un movimiento popular débil, desarticulado nacionalmente, cooptado y diezmado en la década de los ochenta cuando Honduras era la base de la contrarrevolución nicaragüense, la ausencia de una oposición política fuerte, con bases sociales propias y con capacidad de impulsar un cambio de las reglas del juego político por la vía militar –como en mayor o menor medida aconteció en El Salvador, Guatemala y Nicaragua– implicó que las fracciones más conservadoras de este país no tuvieran la necesidad de reconvertirse o adaptarse políticamente tras el fin de las guerras civiles o de la guerra fría.

Este marco restrictivo posibilitó la conformación de un “sistema bipartidista estable” (Klesner) en el cual la polarización social no podía expresarse en el espacio político formal. Por el contrario, fue invisibilizada por la adhesión de los sectores populares a una de las dos grandes fuerzas partidistas, por la fragmentación de los movimientos sociales anti-gubernamentales y la marginación política en la que terminó la izquierda hondureña. Sin embargo y como corolario de toda esta problemática, la fuerte reacción social al golpe cívico-militar y el llamado a la “rebelión” por parte del ex mandatario han impulsado un reagrupamiento de actores en el espacio político, lo cual –a mediano plazo– podría dar paso no solo a una ruptura del bipartidismo y a la aparición de una contra élite, o una nueva fuerza partidista, sino también ser una oportunidad para la emergencia y fortalecimiento de nuevos liderazgos sociales y de un movimiento popular de alcance nacional (actores políticos que habían estado ausentes hasta estos momentos).

En este sentido –y finalmente– para explicar el porqué de la mayoritaria reacción social en contra del golpe militar, no es sostenible argüir que fuera resultado solamente de una defensa popular a favor del gobierno de Zelaya (sobre todo si recordamos la baja –si bien creciente– popularidad que tenía el propio presidente al momento de su destitución), como tampoco cabe circunscribirla a una respuesta coyuntural en la cual un vasto sector de la sociedad se movilizó en contra de una opción autoritaria (en un país que es conocido por la aparente apoliticidad de la mayoría de su población); por el contrario, tal reacción hay que enmarcarla en un

proceso lento pero progresivo de “construcción de ciudadanía” en diversos segmentos de la población como resultado de las sucesivas crisis acontecidas en Honduras a partir –a lo menos– del paso del Huracán Mitch, las cuales activaron desde las múltiples defensas sectoriales un imaginario político crítico al orden formal y fáctico, pero propositivo en términos de la noción de democracia que las hondureñas y los hondureños aspiran a tener para un futuro inmediato. En consecuencia, el abstencionismo “activo” en los comicios presidenciales de noviembre de 2009, como la masiva concurrencia a las manifestaciones del primero de mayo de 2010, deben ser vistas no solo como expresiones de la resistencia social a los intentos de “naturalizar” las relaciones de fuerza surgidas del golpe, sino que constituyen, a la vez, expresiones de una conciencia ciudadana que ha venido madurando desde algún tiempo a la fecha.

Bibliografía

- Agencia ACAN-EFE 2007 “Organizaciones populares de Honduras protestan contra alza de precios” en *La Primerísima* <www.radiolaprimerisima.com/noticias/20366>, 12 de octubre. Consulta en marzo de 2010.
- Argenpress 2007 “Con movilizaciones en todo el país, hondureños exigen derogación de la Ley de Minería” en *No a la mina. Asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel por el no a la mina* <www.noalamina.org> 11 de marzo, sección “Minería en Latinoamérica”, página 276. Consulta en marzo de 2010.
- Castellanos, Julieta 2006 “Honduras: gobernabilidad democrática y sistema político” en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) marzo, edición especial.
- CNRP, CUTH y CGT 2007 “Honduras: Demandas de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) al gobierno” en *La Vía Campesina*, disponible en <<http://viacampesina.org>>. 9 de septiembre, sección “Noticias de las regiones”. Consulta en marzo de 2010.
- COFADEH s/f “Se conforma movimiento amplio por la dignidad y contra la corrupción” en *Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)* <www.cofadeh.org/html/noticias/conforman_movimiento_amplio.htm>. Consulta en abril de 2010.
- Comunicación Comunitaria 2006 “Licitación de combustibles no lleva como propósito expropiar a transnacionales” en *ALAI. América Latina en Movimiento*, disponible en <<http://alainet.org>>, 12 de septiembre, subsección “Recursos Naturales” de “Economía”. Consulta en marzo de 2010.
- Dagnino, E. et al. 2006 “Introducción: Para otra lectura de la disputa por la construcción democrática en América Latina” en Dagnino, Evelina; Olvera, Alberto J. y Panfichi, Aldo (coords.) *La disputa por la construcción democrática en América latina* (México: FCE/CIESAS/Universidad Veracruzana).
- Durand, Francisco 2006 “El vuelo de los cóndores. Despliegues etnonacionalistas y temores empresariales” en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 202, marzo-abril.

- EcoPortal.net* s/f "Honduras: el 31% del territorio hondureño en poder de las compañías mineras" en *EcoPortal.net. El directorio ecológico y natural*, disponible en <<http://www.ecoport.net/content/view/full/42926>> 19 de marzo de 2005. Consulta en marzo de 2010.
- El Heraldo* 2009 "Gobierno de Honduras se reúne hoy con los empresarios" en *El Heraldo* (Honduras: PUBLYNESA) disponible en <www.elheraldo.hn/content/view/full/67295>, 11 de noviembre. Consulta en marzo de 2010.
- Garretón, Manuel Antonio 2002 "La transformación de la acción colectiva en América Latina" en *Revista de la CEPAL* (Santiago de Chile: NU) N° 76, abril.
- Klesner, Joseph L. 2006 "El año electoral decisivo de América Latina" en *Foreign Affairs en Español* (México: ITAM) Vol. 6, N° 2, abril-junio.
- La Prensa* 2006 "Gobierno emprende plan de protección de bosques" en *La Prensa* (San Pedro Sula: OPSA) disponible en <www.laprensa.hn>, 31 de enero, sección "País", edición anterior del 1 de febrero. Consulta en mayo de 2010.
- Moreno, Ismael 2007 "El Presidente en su laberinto (o en su 'patastera')" en *Revista Envío* (Managua: UCA) N° 305, agosto.
- Moreno, Ismael 2009 "Mal comenzó el último año de Zelaya" en *Revista Envío* (Managua: UCA) N° 324, marzo.
- Murillo Parrales, Álvaro 2006 "Cómo Honduras enfrenta crisis energética" en *El Nuevo Diario* (Managua), disponible en <www.elnuevodiario.com.ni>, sección "Opinión", 21 de julio.
- National Climatic Data Center* del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, disponible en <<http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/reports/mitch/mitch.html>>. Consulta en mayo de 2010.
- Partido Liberal de Honduras s/f "Declaración de Principios, Estatutos y Plan de Acción Política", disponible en la sección "Estatutos" de su página web: <www.partidoliberaldehonduras.hn>.
- Pineda, Norma 2010 "Honduras: Homicidios diarios ahora son 14" en *La Prensa* (San Pedro Sula: OPSA) 20 de enero, sección "Apertura". Consulta en marzo de 2010.
- Pion-Berlin, David 2008 "Militares y democracia en el nuevo siglo. Cuatro descubrimientos y una conclusión sorprendente" en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 213, enero-febrero.
- Salomón, Leticia "Políticos, empresarios y militares: Protagonistas de un golpe anunciado" en *Artículos sobre el golpe de estado en Honduras*, Boletín Especial N° 92 editado en septiembre de 2009 por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH).
- SIERP s/f "Visión del poder ciudadano para transformar a Honduras" en *Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (SIERP)* (Tegucigalpa: SEDP) disponible en <www.sierp.hn>, subsección "Otros" en "Biblioteca y Documentos".
- Tarrow, Sidney 1997 *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza Editorial).
- Torres Calderón, Manuel 2003 "Honduras: ¿Transición hacia dónde?" en *Nueva Sociedad* (Buenos Aires: Friedrich Ebert Stiftung) N° 185, mayo-junio.

Torres Calderón, Manuel 2009 “La lucha popular más prolongada desde los 69 días de la huelga bananera. 70 y más días de resistencia contra el golpe y la sumisión” en Salomón, Leticia y Torres Calderón, Manuel (coords.) *Artículos sobre el golpe de estado en Honduras* (Tegucigalpa: CEDOH) Boletín Especial N° 92, septiembre.

Notas

1 Una revisión de la producción académica, política y periodística permite constatar la ausencia de esta pregunta básica. Es el caso de los importantes artículos escritos por Leticia Salomón en esta coyuntura, pero a quien le debemos algunas de las primeras contribuciones académicas para entender el golpe de Estado. Al respecto véase Salomón, 2009.

2 La información corresponde al *National Climatic Data Center* del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, disponible en <<http://lwf.ncdc.noaa.gov/oa/reports/mitch/mitch.html>>. Consulta en mayo de 2010.

3 Dos tercios de la capacidad energética instalada en Honduras son generados térmicamente con petróleo importado, lo que incide en que este sistema sea vulnerable a los altos y volátiles precios del crudo.

4 Léase La Prensa (31 de enero de 2006).

5 Previo a la asunción de Zelaya Rosales, el gobierno del presidente Ricardo Maduro declaró una “emergencia energética” cuando el barril de crudo rondaba –en septiembre de 2005– los 65 dólares y el de diesel los 92 dólares. Este aumento significó que la factura petrolera del país pasara de 637 millones de dólares en 2004 a 904 millones en moneda estadounidense en 2005. Ante el alza de los precios internacionales, el gobierno se vio en la necesidad de aumentar en 19,7% los precios de las gasolinas y en 7,9% los de los demás combustibles. Como consecuencia de estas medidas, una protesta de 5 mil taxistas paralizó Tegucigalpa y obligó al Congreso de Honduras a aprobar dos decretos para derogar los aumentos y ratificar “medidas compensatorias”. Además, el parlamento nombró la Comisión de Notables, cuya función fue “revisar y supervisar permanentemente los mecanismos de fijación del precio de los derivados del petróleo y explicar a la ciudadanía sobre su funcionamiento y conclusiones, así como hacer recomendaciones sobre los mismos”. Dos fueron las recomendaciones principales que emanaron de este informe y que serían consideradas por el futuro presidente: 1) la licitación internacional para la adquisición de combustibles, mecanismo que permitiría romper el mercado oligopólico de importación y posibilitar un ahorro de entre 46 y 76 millones de dólares al país; y 2) abrir un segundo concurso para la construcción de una terminal de almacenamiento con capacidad de 2,5 millones de barriles de carburantes, como primer paso para la construcción de la primera refinería del país con capacidad de almace-

namiento de 300 mil barriles por día. Léase Murillo Parrales, 2006.

6 *Ibídem*.

7 Cabe señalar que frente a la fuerza social que activó este movimiento huelguístico, el entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, acusó a los fiscales de “subvertir el orden constitucional”. Léase “Se conforma movimiento amplio por la dignidad y contra la corrupción” en Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) <www.cofadeh.org/html/noticias/conforman_movimiento_amplio.htm>. Consulta en abril de 2010.

8 Citado en Moreno (2009). La falta de credibilidad de los partidos y de la clase política ha sido constatada en múltiples encuestas. Ya en el año 2001, una encuesta realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción otorgó a la clase política una credibilidad por debajo de las fuerzas armadas. Además, otro estudio señaló que los políticos ocuparon el último lugar en la percepción ciudadana sobre las diversas élites de Honduras, encuesta que fue elaborada por el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2002. Véase Castellanos (2006).

9 El concepto de estructura de oportunidades políticas fue acuñado por el sociólogo Sidney Tarrow para explicar la emergencia de los movimientos sociales dentro de un sistema político. Véase Tarrow (1997).

10 Es interesante observar, retrospectivamente, la distancia política que existía entre el gobierno de Zelaya y las organizaciones sociales convocantes en los inicios de su mandato, organizaciones que en 2009 fueron las principales voceras para su restitución. Las palabras del secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y dirigente de la CNRP, Juan Barahona, son esclarecedoras. “[El gobierno de Zelaya] no ha querido controlar los precios para favorecer al pueblo, sino que el Ministerio de Comercio únicamente se ha dedicado a avalar todos los precios que imponen los empresarios”, aseveró este dirigente gremial, para concluir que “estos gobiernos neoliberales que elige el pueblo no deciden nada si no es a través de la consulta con la embajada de Estados Unidos o con los organismos financieros”. Léase Agencia ACAN-EFE (2007).

11 Léase Argenpress (2007: 276). De hecho, un estudio elaborado por la Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONONG) cuyo título es

"Estudio. Industrias Extractivas: Minería y Petróleo" afirma que bajo las actuales leyes cerca del 31% del territorio hondureño, de 112.492 km², está en poder de transnacionales mineras por vía de concesiones. Léase EcoPortal.net (19 de marzo de 2005).

12 Cabe señalar que la demanda de los obreros en esas negociaciones era por un incremento del 30% al salario. Sin embargo, fue el gobierno el que fijó un aumento superior al 60%. De esta manera el salario mínimo mensual para el área rural se elevó a 4.055 lempiras (unos 211 dólares con la tasa de cambio de marzo de 2010) y para el sector urbano a 5.500 (aproximadamente 287 dólares). Léase El Heraldo (11 de noviembre de 2009).

13 En cierto sentido, una situación parecida experimentó Argentina entre los años 2001 y 2003. La crisis integral del país del Río de la Plata dio paso a un cuestionamiento y una redefinición de los parámetros doctrinarios seguidos desde la era de Menem. La estructura de oportunidades políticas que se le presentó a Eduardo Duhalde primero y a Néstor Kirchner después pasó en primer término por una reinterpretación política de la economía en clave neoliberal y no por un ajuste técnico, como lo había conceptualizado el gobierno de Fernando de la Rúa; en segundo lugar por una modificación en las alianzas nacionales, dado el alto grado de descrédito de la clase política y en tercer término por una reorientación estratégica en la agenda social y política, en concordancia con la inflexión ideológica regional que se percibía en los inicios del siglo XXI.

14 Zelaya Rosales fue electo con el 49,9 % de los votos válidamente emitidos en las elecciones de noviembre de 2005, en la cual solo participó el 50,34% de los inscritos en el padrón electoral; sin embargo, este porcentaje baja a un 23% si contabilizamos los votos nulos y blancos y a todos aquellos que se abstuvieron en esa oportunidad. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2003 en Argentina, Néstor Kirchner obtuvo una votación de tan solo el 22,24%, siendo el segundo mejor votado por detrás de Carlos Saúl Menem, que recibió el 24,45% de los sufragios.

15 Desde su fundación en 1891, el Partido Liberal de Honduras (PLH) ha sido una de las fuerzas dominantes de la política hondureña en conjunto con su rival más a la derecha, el Partido Nacional. Entre 1933 y 1957 los gobiernos autoritarios nacionalistas (siendo el más prolongado y arquetípico el dirigido por el dictador Tiburcio Carías Andino) mantuvieron al PLH en la oposición. De manera análoga al Partido Liberal de Colombia, el PLH está integrado por múltiples facciones dentro de las cuales ha predominado una postura regional integracionista (de raigambre morazanista), antimilitarista (en razón de su exclusión política tanto por las dictaduras personalistas como por las corporativas) y socialdemócrata (ya en 1932, bajo el liderazgo de José Ángel Zúñiga Huete, esta orgánica partidaria se declaró como un partido de izquierda democrática).

16 Tras la muerte de Modesto Rodas en julio de 1979, Roberto Suazo Córdova se erigió en candidato a la presidencia del PLH en las elecciones programadas para noviembre de 1981 (las primeras tras dieciocho años de gobierno militar). Su triunfo electoral en gran medida fue resultado de la capacidad de traspasar para sí las simpatías electorales que despertaba Rodas.

17 Antes de ser electo presidente, Carlos Roberto Reina Idiáquez fungía de magistrado del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos al tiempo que encabezaba la facción Movimiento Liberal Democrático Revolucionario, de tendencia centrozquierdista y antimilitar, dentro del Partido liberal.

18 Con anterioridad, durante su primer mandato como diputado nacional, José Manuel Zelaya Rosales participó en las comisiones legislativas de Recursos Naturales y Petróleo en el Congreso de su país.

19 Citado de la "Declaración de Principios, Estatutos y Plan de Acción Política" del Partido Liberal de Honduras, disponible en la sección "Estatutos" de su página web <www.partidoliberaldehonduras.hn>. Énfasis propio.

20 Como señalan Dagnino et al. (2006), un rasgo particular del período actual es la pugna entre actores que defienden proyectos políticos opuestos –de manera esquemática, uno democrático-participativo, uno neoliberal y uno autoritario– por dominar los procesos de construcción de la democracia en la región y que utilizan los mismos términos y conceptos. La dificultad reside entonces en saber identificar los distintos e incluso opuestos significados que conceptos como "democracia", "participación ciudadana", "transparencia" o "rendición de cuentas" adquieren al ser apropiados por dichos actores.

21 El programa de gobierno señala específicamente: "La corrupción campea en nuestra sociedad con carta de ciudadanía, para transformarse en elemento arraigado y común en las relaciones de nuestros semejantes. [...] La corrupción es un flagelo que envenena cualquier estrategia de reducción de la pobreza y/o plan de desarrollo y pone en precario el derecho de cualquier ciudadano. [...] La política actual de represión del individuo por el delito común calla con desfachatez frente a la escandalosa impunidad de los delitos cometidos por parte de individuos de cuello blanco, como fraudes y evasión tributaria, malversación de caudales públicos, quiebras fraudulentas de entidades financieras y compras gubernamentales adulteradas, así como contratos y concesiones amañadas por los íntimos del poder". Citado de "Visión del poder ciudadano para transformar a Honduras" en Sistema de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (SIERP) (Tegucigalpa: SEDP) <www.sierp.hn>, subsección "Otros" en "Biblioteca y Documentos".

22 En paralelo a la campaña electoral de Zelaya en 2005, la candidatura a la presidencia de Michelle Bachelet en Chile tuvo entre sus objetivos el promover "un gobierno ciudadano" que posibilitara reencontrar

a los votantes de la Concertación de Partidos por la Democracia con la política y los políticos. En un escenario económico de superávit fiscal y de grandes ganancias empresariales, pero con desiguales niveles de inversión social y de redistribución en los ingresos, esta convocatoria no solo tuvo como efecto elevar las expectativas ciudadanas sino también —y de manera no prevista por sus patrocinadores— relegitimar el derecho a la movilización social (como fueron las huelgas de los trabajadores forestales y de los obreros subcontratistas de la estatal minera cuprífera CODELCO, y las movilizaciones de los estudiantes secundarios en

todo el país, que desembocaron en graves conflictos entre su gobierno y estos sectores organizados). En este sentido, al alentar con su discurso la participación, movilización y organización social, la convocatoria para construir “un gobierno ciudadano” contribuyó —sin proponérselo— a desnudar y cuestionar las bases autoritarias y los marcos antidemocráticos sobre los que está construida la estabilidad institucional y la gobernabilidad política en el Chile post dictatorial, bases y marcos que los propios partidos del ahora ex conglomerado de gobierno consensuaron con la derecha política y militar en 1990.